

Boletín Oficial

DE LA PROVINCIA DE ORENSE.

ADVERTENCIA OFICIAL.

Las leyes y disposiciones generales del Gobierno, son obligatorias para cada capital de provincia donde se publican oficialmente en ella, y desde cuatro días después para los demás pueblos de la provincia. (Ley de 28 de Noviembre de 1857.)—Las disposiciones de las autoridades, excepto las que sean a instancia de parte no pobre, se insertarán oficialmente, como asimismo cualquier anuncio concerniente al servicio de la Nación que dimanase de las mismas, pero las de interés particular pagarán su inserción, entendiéndose en este último caso con el Editor del Boletín.

SE PUBLICA TODOS LOS DIAS PARES.

PRECIOS DE SUSCRICION.—En Orense, por trimestre, 5 pesetas.—Para fuera de esta capital, franco de porte, por trimestres adelantados, 7 pesetas.—Números sueltos, 38 céntimos.—Se suscribe en esta capital, Imprenta de José M. Ramos y Antonio Otero, Colon, núm. 12.—En las demás provincias, en las principales librerías.

PRIMERA SECCION.

PARTE OFICIAL.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

S. M. el Rey (Q. D. G.) y su Augusta Real Familia continúan en esta Corte sin novedad en su importante salud.

(Secreto núm. 220.)

CONSEJO DE ESTADO.

REAL DECRETOS.

Don Alfonso XII, por la gracia de Dios, Rey constitucional de España.

A todos los que las presentes vieran y entendieren, y a quienes toca su observancia y cumplimiento, sabed: que he venido en decretar lo siguiente:

En el pleito que en primera y única instancia pende ante el Consejo de Estado, entre partes, de la una el Licenciado D. Lorenzo Ballesteros, en nombre de D. Jerónimo Sánchez, D. Joaquín Ruiloba Gomez y otros individuos que fueron de los Ayuntamientos de Alfoz de Lloredo en los años de 1864 a 1870, demandantes, y de la otra la Administración general del Estado representada por mi Fiscal, demandada, sobre subsistencia o revocación de la orden del Presidente del Poder Ejecutivo de la República expedida por el Ministerio de la Gobernación en 24 de Julio de 1874, que declaró a los recurrentes responsables al pago de cierta cantidad:

Visto:

Visto el expediente gubernativo, del cual resulta:

Que en 8 de Febrero de 1870 D. Francisco Diaz Lavandero, Depositario de los fondos municipales del pueblo de Alfoz de Lloredo, provincia de Santander, entregó

a D. Manuel Gutierrez, Alcalde del mismo, la cantidad de 7.274 reales en metálico; 1.000 en un libramiento a favor de D. Nicolás Obregon y 726 en una carta de pago para satisfacer el impuesto personal correspondiente al citado pueblo:

Que instruido el oportuno expediente para la rendición y censura de las cuentas municipales referentes a los años de 1864 a 1870, fueron reparadas aquellas partidas y condenado el D. Manuel Gutierrez al pago de su importe si no justificaba su inversión:

Que con este motivo acudió dicho interesado a la Comisión provincial de Santander, manifestando que de la cantidad de que se trata había entregado 7.000 rs. a D. Nicolás Obregon, según lo había acreditado por el recibo del mismo, firmado en Santander a 9 de Febrero de 1870, que exhibió ante el Ayuntamiento, y del cual acompañó copia:

Que según resulta de la copia de la escritura de poder que obra en el expediente, otorgada en 15 de Setiembre de 1864 por D. José de la Vega, Alcalde que era en aquella fecha de Alfoz de Lloredo, a favor de D. Nicolás Obregon, se autorizó a este para cobrar los intereses de las inscripciones intrasferibles, recoger de la Tesorería de la provincia cualesquiera otras cantidades correspondientes al Municipio, liquidar cuentas por sí o de la manera que juzgase oportuno, y para imponer cualesquiera cantidades correspondientes a dicha Corporación, otorgando al efecto los documentos necesarios con todas las seguridades y requisitos que convengan, dando y otorgando de lo que perciba y cobre los recibos y cartas de pago que deba, declarándolos desde luego tan firmes y subsistentes como si por el otorgante y el Ayuntamiento de Alfoz hubiesen sido intervenidos:

Que la Comisión provincial, después de oír a la Corporación municipal interesada, acordó en 4 de Agosto de 1871 que D. Manuel Gutierrez, dentro del término de 15 días, acreditase por medio de la oportuna carta de pago haber entregado en la Tesorería de la provincia los 9.000 rs. en cuestión, y que de no hacerlo se procediese contra él por la vía de apremio:

Que habiendo fallecido D. Manuel Gutierrez, acudió su viuda Doña Josefa Gonzalez a dicha Comisión en solicitud de que se declarase que eran responsables al reintegro de los 9.000 rs. todos los individuos que formaron parte de los Ayuntamientos que mantuvieron como apoderado a D. Nicolás Obregon, por no haberle exigido la fianza correspondiente: y aquella Corporación, en 2 de Febrero de 1872, confirmó su anterior acuerdo, mandando que el Ayuntamiento procediese contra los herederos de D. Manuel Gutierrez para hacer efectiva aquella cantidad:

Que contra la anterior resolución interpuso la interesada recurso de alzada, para ante el Ministerio de la Gobernación, el cual por orden de 24 de Julio de 1874, dictada de conformidad con el dictamen emitido por la Sección de Gobernación y Fomento del Consejo de Estado, anuló el acuerdo apelado de la Comisión provincial de Santander, y declaró que los Ayuntamientos son responsables civilmente al Municipio en caso de insolvencia de los Depositarios, agentes nombrados por los mismos sin las convenientes fianzas de los sueldos que puedan resultar a favor de los fondos comunes:

Vistos los autos contencioso-administrativos, de los que aparece:

Que en 13 de Enero de 1875 el Procurador D. Angel Calvo, en representación de D. Jerónimo Gonzalez Sanchez, D. Joaquín

Ruiloba Gomez y otros individuos que fueron de los Ayuntamientos de Alfoz de Lloredo, en los años de 1864 a 1870, interpuso ante el Tribunal Supremo, demanda contencioso-administrativa, que una vez declarada procedente, amplió ante el Consejo de Estado el Doctor D. Benito Gutierrez, al que se hubo por parte en la representación indicada, pidiendo la revocación de la anterior resolución ministerial:

Que emplazado mi Fiscal contestó a la demanda en escrito de fecha 1.º de Marzo de 1877, pidiendo que se absuelva de ella a la Administración general del Estado y que se confirme la orden reclamada:

Y que la Sección, por auto de 12 de Julio siguiente, hubo por parte en estos autos al Licenciado D. Lorenzo Ballesteros en representación de los demandantes:

Visto el art. 144 de la ley Municipal de 21 de Octubre de 1861, que dice: «Los Depositarios y agentes de la recaudación municipal son responsables ante el Ayuntamiento; pero esta lo queda sin embargo al Municipio civilmente en caso de insolvencia de aquellos, y salvos sus derechos contra los mismos.»

Considerando que en este pleito no ha podido discurrirse ni se ha discurrido el acto del Depositario de fondos municipales de Alfoz de Lloredo, que entregó al Alcalde del mismo pueblo los 9.000 rs. que se cuestionan; acto que parece ejecutado en concepto de conducción de caudales, para lo que eran bastante garantía los recibos provisionales y que está sancionado implícitamente por el Ayuntamiento ante quien presentó las cuentas, el cual le admitió en ellas la partida, reparándolas contra el Alcalde;

Considerando que el Alcalde D. Manuel Gutierrez entregó, según aparece del recibo que ha presentado, los 7.000 reales que

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA.

Doutor: Manuel Blanco, por su
mujer Sebastiana Salgado, de
Doutor: Feline Cid, por su

Vieiros; Laureano Cid Mendez, de Vieiros; Francisco Rodri-
guez por su mujer Francisca
Outeiro de Moreira; Francisco
Carballo de Casas; Benito
Laso Fernandez; Antonio
de Covas; Andrés de
Fernandez de Tombo de
Covas; Manuel González Riva-
deneira de Cachumilay; D. An-
tonio Miguel Lozano, por su mu-
jer D.ª María González de Ca-
chumilay; D. Camilo Rodríguez
Pérez de Orense; Andrés Sal-
gado Cid de San Martín de Mo-
reiras; José María Penedo, por
su mujer Josefa Salgado Cid, de
San Martín de Moreiras y D. Ma-
nuel Nogueiras Díaz, de Orense,
representados todos ellos por
los testados del Juzgado, sobre
disposición y adjudicación de bie-
nes de dos capellanías.

1.º Resultando que María Lo-
renzo, vecina que fué de Outeiro
de Caspiñon, determinó, en una
de las cláusulas del testamento
que otorgó el 21 de Setiembre de
1864, que si después de su muer-
te perseverase su marido Benito
Alvarez de Porras en estado de
luego, gozare, llevar y poseyera
todos sus bienes muebles y rai-
ces usufructuándolos por los
días de su vida en la misma for-
ma que los había poseído du-
rante el matrimonio, dejándolos
libres a su fallecimiento, para
que los partieran y dividieran
por iguales partes sus herma-
nos Barbara, Marta y Antonio
Lorenzo, o los herederos de le-
gítimo matrimonio que fincar-
en de los mismos. Pero que si el refe-
rido su marido se quisiese orde-
nar de sacerdote, le dejaba des-
de luego todos los bienes, accio-
nes y derechos de libre y espon-
tánea donación sin que las otras
cláusulas que dejaba estableci-
das, con referencia a sus her-
manos y sobrinos, le pudieran
perjudicar en cosa alguna, para
que pudiera fundar una capella-
nía colativa, y a título de ella se
ordenaren de sacerdote los lla-
mados a servirla, para que le
dijeran en cada año doce misas
perpetuas por su alma en la
Iglesia y altar de Nuestra Seño-
ra de la Asunción de Santa Mar-
ta de Moreiras, y que después
de la muerte del Benito Alvarez
de Porras, sucediesen en la obten-
ción y goce de la capellania de
que se halla en primer lugar
los hijos y descendientes de le-
gítimo matrimonio de su her-
mana Barbara Lorenzo, en se-
gundo lugar los de su hermano
Antonio Lorenzo, y en tercero
los de Juan Lorenzo de Caspi-
ñon y Aldonza Martínez sus
abuelos, sucediéndose en esta
forma los unos a los otros.

2.º Resultando que Benito
Alvarez de Porras por el testa-
mento que otorgó en 15 de Oc-
tubre de 1864, ratificó la capella-
nía colativa de doble patronato
familiar fundada por su mujer
María Lorenzo, la que dotó con
varios bienes, llamando para
servirla a los hijos y descen-
dientes por línea recta de Juan
Lorenzo y Aldonza Martínez,
abuelos de aquella, y que agota-
da la línea recta entrase la tras-
versal prefiriendo siempre el
varón a la hembra.

3.º Resultando que por el tes-
tamento que otorgó D. Juan Cid
Ogea en 5 de Setiembre de 1875,
fundó otra capellania de patro-

nato activo y pasivo, general y
graduado para todos sus parien-
tes, por línea recta en el altar de San
Roque de la parroquia de San
Ciprián de Viñas, llamando en
primer lugar para servirla a la
capellania que nombrase su her-
mano Jacome Cid Ogea, a quien
designaba por patrono con fa-
cultad de que después la hiciera
colativa entre sus parientes mas
allegados, dotando esta memo-
ria con varios bienes que había
de disfrutar el capellan que la
serviera.

4.º Resultando que encon-
trándose vacantes las dos cape-
llanías, solicitaron algunos des-
cendientes de las líneas llama-
das a obtenerlas, la conmutación
de cargas eclesiásticas por ser
incongruas una y otra con ar-
reglo a lo dispuesto en la ley
convenio de 24 de Junio de 1867,
e Instrucción de 5 de Junio del
mismo mes y año, para su eje-
cución y cumplimiento, y forma-
dos los oportunos expedientes
contradictorios, ante la comisión
diocesana de este Obispado, se
liquidaron las cargas, y por do-
creto de 21 de Abril de 1871, se
adjudicaron de libre disposición
los bienes de la dotación de la
capellania de Nuestra Señora de
la Asunción a D. Francisco Car-
ballo, Francisca Pérez, mujer de
Francisco Rodríguez, Gumersin-
do González, D. José Garza Pu-
ga, como marido de D. Espe-
ranza Cid, Consolada Cid, mujer
de Manuel Cid, Ramón Cid, ma-
rido de Manuela Cid Camba, Ca-
milla Cid, mujer de Francisco
González Pérez, doña Sebas-
tiana Salgado, mujer de Ma-
nuel Blanco, José Fernández,
Andrés Formoso, Andrés Loren-
zo, como heredero de Pedro Pe-
rez, Agustín Blanco y Manuel
Rodríguez, por ser quintos nie-
tos de Barbara Lorenzo, cabeza
de la primer línea llamada.

5.º Resultando que de igual
modo acreditado el entronque y
filación con Jacome Cid, mari-
do que fué de Barbara Lorenzo,
cabeza de la primer línea llama-
da por D. Juan Cid Ogea, funda-
dor de la capellania de San Ro-
que en la parroquia de San Ci-
prián de Viñas, se adjudicaron
por el diocesano los bienes do-
tales de la misma a los quintos
nietos D. Francisco Carballo,
Francisco Rodríguez, marido de
Francisca Pérez, Felipe Cid, Ce-
lestino Cid, Laureano Cid, Gu-
mersindo González, D. Manuel
Azpilcueta, por sus hijos D. José
María, D. Elisa y D. Nazario Az-
pilcueta, Rodríguez, D. Manuel
González Rivadeneira, D. María
González Rivadeneira, mujer de
D. Ángel Lozano, José Garza,
marido de D. Esperanza Cid,
Manuel Cid, marido de Consola-
da Cid, Ramón González Cid,
marido de Manuela Cid Camba,
Camilla Cid, mujer de Francisco
González Pérez, Andrés Salgado
Cid, Josefa Salgado, mujer de
José Penedo, D. Manuel Rodri-
guez Pérez y D. Camilo Rodri-
guez Placer.

6.º Resultando que por parte
de José Fernández y consortes
se dedujo demanda por acción
mixta real y personal contra
D. José Garza Puga y demás ad-
judicatarios de los bienes de las
capellanías referidas, pelen-
diendo los bienes declarara descen-
dientes de Barbara Lorenzo y su

marido Jacome Cid, cabezas de
la primer línea llamada, y en su
consecuencia se condujera a los
demandados a que entregaran
la parte aliecuota que les corres-
pondía percibir de las cotacio-
nes de las dos memorias men-
cionadas, por hallarse en igual
grado de parentesco que el que
aquellos ostentaban, y para
ello alegaron que fundadas las
dos capellanías denominadas de
Nuestra Señora de la Asunción
y de San Roque, se designó a
Barbara Lorenzo como cabeza
de línea respecto a la primera
y a su marido Jacome Cid Ogea,
como tronco para la sucesión de
la segunda, y encontrándose va-
cantes por muerte de los cape-
llanes respectivos, solicitaron
varios parientes la conmutación
de cargas eclesiásticas y adju-
dicación de los bienes de las do-
taciones de una y otra, en virtud
de lo dispuesto en el convenio
ley de 24 de Junio de 1867, ha-
ciendo caso omiso de los demás
parientes que se encontraban en
igual grado, y con la misma le-
gitimidad que ellos ostentaban,
y en efecto obtenida de la Dele-
gación diocesana de este obispa-
do, la conmutación y adjudica-
ción de que se viene haciendo
mérito, se repartieron los bie-
nes entre sí, sin contar con los
demás. Pero que en virtud de lo
dispuesto en el art. 1.º de la ley
de 19 de Agosto de 1841, sobre
desamortización y división de
los bienes de las capellanías co-
lativas, y conforme a lo deter-
minado en el art. 36 de la Ins-
trucción de 25 de Junio de 1867,
para la ejecución del convenio ley
de 24 del mismo mes y año, les
correspondía percibir la parte
aliecuota que les tocase de las do-
taciones de las capellanías es-
presadas, por no haber mediado
convenio amigable y estrajudi-
cial entre todos los interesados
y para probar su entronque y
filación con las cabezas de lí-
nea de que antes se hizo mérito,
presentaron varias partidas sa-
cramentales y un árbol genealó-
gico.

7.º Resultando que admitida
la demanda se concurrió traslado
de ella a D. José Garza Puga y
consortes, y emplazados todos
ellos para que comparecieran a
contestarla, vendieron algunos
demandantes por escritura pú-
blica el derecho que tenían a Be-
nito Martínez Doniz, y otros de-
mandados cedieron al mismo la
participación que ostentaban a
los bienes de la capellania de la
Asunción, a cambio de la re-
nuncia que aquel hizo a favor
de ellos del derecho que tuviera
a la capellania de San Roque, y
ratificados en estas enagenacio-
nes y convenios, se aprobaron
por auto de 8 de Octubre de 1873
los contratos otorgados acordán-
dose se eliminasen del litigio los
demandantes que habían enaje-
nado su derecho al Martínez Do-
niz para que este los represen-
tara en su lugar y circunstan-
cias.

8.º Resultando que pedida re-
posición de dicho auto por va-
rios demandados, en virtud de
haberse enajenado la cosa liti-
giosa contra la determinación
expresa de la ley 13 tit. 7 de la
ley de 1.º de Enero de 1875, se dictó otro auto en
5 de Enero de 1875 reponiendo
lo acordado en el anterior para

que las partes continuasen el li-
tigio en nombre propio y bajo
los conceptos con que habían
comparecido antes del otorga-
miento de las escrituras con Be-
nito Martínez Doniz, por no po-
derse transmitir los derechos liti-
giosos en perjuicio de los demás
coligantes sustituyéndose unas
personalidades con las otras.

9.º Resultando que al contestar
la demanda D. José Garza Puga y
consortes se opusieron a ella
preludiando se declarase nula,
de ningún valor ni efecto la es-
critura de fundación de la Cape-
llania de la Asunción, otorgada
por Benito Alvarez Porras, y en
todo caso absolverlos de la mis-
ma con las costas, alegando a
dicho fin que por el testamento
que otorgó María Lorenzo el 21
de Setiembre de 1864, ordenó que
dejaba a su marido en usufructo
todos sus bienes si permanecía
en estado de luego, pasando des-
pués de su muerte en concepto
de libres a sus hermanos Barba-
ra, María y Antonio Lorenzo, a
los herederos de legítimo ma-
trimonio que fincarán de los
mismos. Pero que si el Benito
Alvarez Porras quería ordenar-
se y hacerse Sacerdote le dejaba
desde luego todos sus bienes
muebles y raíces de libre dona-
ción, para que sobre ellos fun-
dase una Capellania a cuyo tí-
tulo se pudiera ordenar y hacerse
clérigo, no solo su marido si no
también los Capellanes que se
fueran sucediendo, en primer
lugar los descendientes de Bar-
bara Lorenzo, después los de
Antonio Lorenzo, y en tercer lu-
gar los de Juan Lorenzo de Cas-
piñon y Aldonza Martínez sus
abuelos. Que a pesar de esto
Benito Alvarez Porras, sin ha-
cerse Sacerdote y contra la vo-
luntad expresa de su mujer Ma-
ría Lorenzo, fundó secundando
el orden de los llamamientos, en
15 de Diciembre del mismo año,
la capellania de Nuestra Señora
de la Asunción, dotándola con
los bienes procedentes de la re-
ferida su mujer, y por lo tanto
siendo nula desde su origen di-
cha institución no podía preva-
lecer con el trascurso del tiem-
po, maxime siendo contraria a
la libertad natural de la propie-
dad, por lo que los bienes que
se reclamaban por los actores
no pertenecían a una capellania
legalmente fundada, sobre la
que pudiera tener aplicación lo
dispuesto en el art. 1.º de la ley
de 19 de Agosto de 1841. Que así
mismo parecía que en 1675 ha-
bía fundado D. Juan Gil Ogea
otra capellania de igual clase
con el título de San Roque, ser-
videra en la parroquia de San
Ciprián de Viñas, para cuyo goce
llamó en primer lugar a su her-
mano Jacome Cid Ogea. Pero
que acerca de este hecho no
prestaban su expreso asenti-
miento. Y por último que el ár-
bol genealógico que acompaña-
ba a la demanda no guardaba
relación con ella, ni estaba fun-
dado en datos positivos por lo
que negaban que los actores co-
tuviesen en quinto grado civil
de parentesco con la cabeza de
la primer línea llamada, y por
lo mismo carecían de título para
obtener partes aliecuotas de los
bienes de ambas fundaciones.

10.º Resultando que acusada
la rebeldía a Benito Lorenzo Pa-

y los 14 consortes de que se hizo mérito al principio, se hizo por contestada la demanda señalándose los estrados para las notificaciones y citaciones sucesivas.

11. Resultando que á pesar de que conmutadas las cargas eclesiásticas por la Junta Diocesana, se adjudicaron de libre disposición los bienes de la misma, entre otras, á D. Gumersindo Gonzalez, Andres Lorenzo como heredero de Pedro Perez, Agustin Blanco, Manuel Rodriguez, Celestino Cid, Gumersindo Gonzalez, D. Angel Lozano por su mujer D.ª Maria Gonzalez Rivadeneira, y D. Manuel Rodriguez Perez, por haber acreditado en el expediente contradictorio seguido ante el Obispado de este Obispado, que eran quintos nietos de las cabezas de linea llamadas para la subvencion de las dos capellanias de la Asuncion y de San Roque, no obstante no fueron demandados.

12. Resultando que recibido el pleito á prueba, practicaron los actores la que creyeron oportuna, sin hacerlo los demandados, y alegando de bien probado por una y otra parte se llamaron los autos á la vista con citacion de las mismas para sentencia.

1.ª Considerando que la capellania que con el nombre de Nuestra Sra. de la Asuncion fundó Benito Alvarez Porras, por su testamento de 15 de Octubre de 1664, fué válida y legal, no solo por que con ella secundó los deseos, intenciones y propósitos de su mujer Maria Lorenzo, expresados en una de las cláusulas de su testamento en 21 de Setiembre del año ya citado, si no es tambien por que en todo caso los que podrían y tendrían derecho á impugnar la institucion serian los hermanos de aquella Barbara, Marta y Antonio Lorenzo á quienes pasarían los bienes como libres después de la muerte del Benito Alvarez Porras sin haberse hecho Sacerdote, y cuando ellos consintieron y aceptaron la fundacion de la capellania admitiendo la Barbara Lorenzo figurar como cabeza de la 1.ª linea llamada hasta el extremo de ser su hijo Juan Cid Lorenzo el primer capellan que la sirvió, carecen de derecho y facultad los demandados don José Garza Puga y consortes para llamar y tener por nula y sin valor la fundacion, con tanto mas motivo cuanto ellos por su parte tambien la han aceptado, solicitando la conmutacion de cargas eclesiásticas, pretendiendo al mismo tiempo la adjudicacion de los bienes como descendientes legítimos de la primer linea llamada.

2.ª Considerando que además de todo esto y no pudiéndose alegar ningun vicio de legalidad intrínseco ni externo al testamento que otorgó Benito Alvarez Porras, por haber reunido las formalidades y requisitos de derecho no puede tampoco invalidarse en lo respectivo á la fundacion de la capellania de que se trata ni echar abajo los derechos creados á su sombra en el transcurso de dos siglos.

3.ª Considerando que en virtud á que las dos capellanias de que se trata son colativas familiares, y que estando ya conmu-

tadas las cargas eclesiásticas impuestas sobre ellas, deben adjudicarse y dividirse los bienes de las mismas como de libre disposicion entre los parientes que desciendan de Jacome Cid y Barbara Lorenzo, instituidos por los fundadores como cabezas de la primer linea llamada, prefiriendo la proximidad del parentesco sin diferencia de sexo, edad, condicion y estado, conforme á lo dispuesto en el art. 1.º de la ley de 19 de Agosto de 1841, sobre desamortizacion de los bienes de capellanias, y art. 36 de la Instruccion de 25 de Junio de 1867 para la ejecucion del convenio-ley de 24 del mismo mes y año.

4.ª Considerando que en tal concepto deben declararse quintos nietos de Jacome Cid y Barbara Lorenzo á todos los interesados á quienes el Obispado adjudicó los bienes de la dotacion de las dos capellanias por haber acreditado contradictoriamente su entronque y filiacion reservando su derecho á D. Gumersindo Gonzalez, Andres Lorenzo como heredero de Pedro Perez, Agustin Blanco, Manuel Rodriguez, Celestino Cid, Gumersindo Gonzalez, D. Angel Lorenzo como marido de doña Maria Gonzalez Rivadeneira y D. Manuel Rodriguez Perez, por que aunque concurrieran á la conmutacion de cargas eclesiásticas, y obtuvieron en la parte que le correspondia la adjudicacion de bienes por el Obispado, no se les puede declarar participantes de las mismas como quintos nietos que efectivamente son de los cabezas de linaje por no haber sido demandados ni figurar en este pleito.

5.ª Considerando que así mismo deben declararse quintos nietos en grado civil de las cabezas de la primer linea llamada á los demandantes, Antonia Parga Blas y por ella su marido José Fernandez, Agustin Blanco Perez por si y sin admitir la representacion de sus tíos D. Angel y D.ª Antonia Perez, por no haber acreditado la cualidad de heredero de los mismos; Antonio Sampedro Perez, Antonia Pato Perez y por ella su marido Bernardo Perez, Manuela Perez Barrio, representada por su marido Ignacio Gomez, Carmen Levices Perez, Manuel Perez Barrio, Ignacio Perez Martinez, Josefa Gil Ansias, representada por su marido Benito Gomez Nespereira, D. Gumersindo Gonzalez Figueiral por si y sin que se admita la representacion de sus tres tíos Fr. Ildefonso, y Frai Ramon y D. Bernardo Gonzalez Valle por no haber acreditado la cualidad de heredero de los mismos, José Cofán Ansias y Francisco Fidalgo Cid por haber probado todos ellos su entronque, filiacion y grado por medio de las partidas sacramentales presentadas.

6.ª Considerando que aunque Manuel Alvarez Fernandez, Benita Blas Perez y á su nombre su marido José Rodriguez, Pedro Blanco Fernandez, los menores hijos de D. Francisco Pedro Montes y D.ª Concepcion Perez Gonzalez y Bernardo Cofán Rivadeneira han acreditado como actores su filiacion y parentesco con las cabezas de la primer li-

nea llamada, sin embargo siendo sextos nietos de los mismos no pueden figurar ni tener obcion á los bienes de las Capellanias en concurrencia de los quintos nietos que son de grado preferente, y por ello procede que se escluyan de la participacion que solicitan.

7.ª Considerando que los demandados Benito Laso Fernandez, Andres de Saa Fernandez, Andres, José y Manuela Formoso, nieto de Rosa Perez y á su nombre su padre Benito Lorenzo Pazo, Manuela Cid, representada por su marido Ramon Gonzalez y Peregrina Cid y á su nombre su marido Manuel Nieto, hijos los dos de Ramon Cid Puga, no habiendo probado ni en poco ni en mucho su entronque y filiacion con la primer linea llamada, es de necesidad imprescindible declararlos excluidos de toda participacion á los bienes de las capellanias de que se trata.

8.ª Considerando que Benito Martinez Doniz y D. Manuel Nogueira Diaz no siendo descendientes de las cabezas de familia para obtencion de las dotaciones de las capellanias mencionadas y no figurando en este pleito por derecho propio sino como cesionarios del que pertenecía á varios parientes, procede se les reserve su derecho segun el valor que tengan los contratos celebrados.

Por estos fundamentos y con mérito á lo que resulta de los autos:

Fallo que debo declarar y declaro quintos nietos de Jacome Cid y Barbara Lorenzo, cabezas de la primer linea llamada para la sucesion de las capellanias de Nuestra Señora de la Asuncion y de San Roque, fundadas por Benito Alvarez Porras y D. Juan Cid Ojeda, á los demandantes Antonia Parga Blas, mujer de José Fernandez; Agustin Blanco Perez; Antonio Sampedro Perez; Antonia Pato Perez, mujer de Bernardo Perez; Manuela Perez Barrio, mujer de Ignacio Gomez; Carmen Levices Perez; Manuel Perez Barrio; Ignacio Perez Martinez; Josefa Gil Ansias, mujer de Benito Gomez Nespereira; don Gumersindo Gonzalez Figueiral, y Francisco Fidalgo Cid; así como tambien declaro quintos nietos á los demandados y adjudicatarios por la Junta diocesana D. José Garza Puga, marido de Doña Esperanza Cid; D. José Maria Azpilcueta Rodriguez; doña Elisa Azpilcueta Rodriguez; D. Nazario Azpilcueta Rodriguez; Consolada Cid, mujer de Manuel Cid; Camila Cid, mujer de Francisco Gonzalez Perez; Manuela Cid Camba, mujer de Ramon Gonzalez Cid; Peregrina Cid Camba, mujer de Miguel Nieto Perez; José Fernandez; Manuel Blanco, marido de Sebastiana Salgado; Felipe Cid Mendez; Laureano Cid Mendez; Francisca Perez, mujer de Francisco Rodriguez; D. Francisco Carballo; D. Manuel Gonzalez Rivadeneira; Doña Maria Gonzalez, mujer de D. Angel Miguel Lozano; D. Camilo Rodriguez Placer; Andres Salgado Cid, y Josefa Salgado Cid, mujer de José Maria Penedo.

Y en su virtud les adjudica á

todos ellos por partes iguales los bienes de la dotacion de las dos capellanias mencionadas para que se los dividan entre si abonando unos y otros, tambien con igualdad, la parte que les toque de la conmutacion de cargas eclesiásticas practicada por la Junta diocesana de este obispado, todo sin perjuicio del derecho que tienen tambien á dichos bienes Andres Lorenzo, como heredero de Pedro Perez; Agustin Blanco; Manuel Rodriguez; Doña Maria Gonzalez Rivadeneira, mujer de D. Angel Lozano; Celestina Cid, y D. Manuel Rodriguez Perez por ser tambien quintos nietos de los llamados como tronco para la sucesion de las dos capellanias, y habiéndoseles adjudicado por la Junta diocesana la parte de bienes que les tocasen de dichas fundaciones.

En igual forma declaro á los demandantes Manuel Alvarez Fernandez; Benita Blas Perez, mujer de José Rodriguez; Pedro Blanco Fernandez; los menores hijos de D. Francisco Prado Montes; Doña Concepcion Perez y Bernardo Cofán Rivadeneira, excluidos de la participacion de los bienes dotales de dichas dos capellanias, por ser sextos nietos de los cabezas de familia, excluyendo de igual modo de toda participacion á dichos bienes á los demandados Benito Laso Fernandez; Andres Saa Fernandez; Andres, José y Manuela Formoso Perez; hijos de Rosa Perez; Benito Lorenzo Pazo á nombre de su menor hijo D. Manuel Lorenzo Formoso, nieto de Rosa Perez; Manuela Cid, representada por su marido Ramon Gonzalez, y Peregrina Cid, mujer de Manuel Nieto, hijas las dos de Ramon Cid Puga, por no haber probado su cualidad de parentesco, y por último reserve á Benito Martinez Doniz y don Manuel Nogueira Diaz el derecho que les asista como concesionarios de varios parientes por sus participaciones respectivas con arreglo á los contratos celebrados: todos sin expresa condenacion de costas.

Y por esta mi sentencia definitivamente juzgando así lo proveo, mando y firmo.—Diego Carrillo de Albornoz.

Pronunciamiento.—Pronunciada fué la anterior sentencia por el Sr. D. Diego Carrillo de Albornoz Juez de primera instancia de la ciudad y partido de Orense, hallándose celebrando audiencia pública el dia 27 de Agosto de 1877, de que fueron testigos los que suscriben vecinos de esta ciudad y yo escribano doy fe.—Manuel Lopez.—Rufo G. Fernandez.—Valentin de Novoa.

Y para que la precodente sentencia se publique en el Boletín oficial de esta provincia, en razon á hallarse en rebeldia varios de los demandados, libro el presente que firmo en estos cinco pliegos del sello de élmo.

Orense Noviembre 29 de 1877.—Valentin de Novoa.